
Argentina: El Cielo por Asalto?

Héctor Alimonda

“Los hombres, a quienes la exclusión há convertido en iguales, están igualmente disponibles, desde la sangre de los rehenes hasta la de los rebeldes...” (Furio Colombo, Poder, grupos y conflicto en la sociedad neofeudal)

“La sociedad argentina (o, por lo menos, una considerable porción de ella) lleva casi dos meses en virtual estado de rebelión social”. Así comenzaba el editorial del diario LA NACION, de Buenos Aires, del día 17 de febrero de 2002. Y continuaba: “Todos los días, grupos de personas más o menos nutridos salen a la calle a golpear cacerolas o a expresar por cualquier otro medio su contundente deseo de que quienes ejercen los poderes del Estado abandonen de inmediato sus cargos. Lo más grave es que no se puede decir que sus reclamos sean inútiles o inoperantes”.

En efecto, desde las jornadas de insurgencia popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, la Argentina vive una situación inédita, caracterizada por el conflicto entre la democracia representativa formal, en colapso, y la aparición de un desafiante “asambleismo popular”, que implica una refundación de la política y una profundización de sus contenidos democráticos.

Es verdad que la crisis social general tiene un componente de estancamiento y regresión económica, pero es evidente que no se limita o se agota allí. Para recurrir a las metáforas gramscianas de la Primera Guerra Mundial, la crisis económica equivale al fuego de la artillería pesada, capaz de desorganizar a los sistemas defensivos y desmoralizar a sus dotaciones, pero no de resolver los conflictos. En realidad, lo más significativo del proceso argentino de este largo verano es la ruptura político-cultural producida entre el Estado y el personal político de los partidos tradicionales con la población en general. Es esa ruptura, inclusive, lo que en este momento paraliza al gobierno de Eduardo Duhalde, dificultando la retomada de las políticas de ajuste.

Esta crisis, por otra parte, debe ser la más anunciada de la historia, y sus señales sólo no fueron percibidas por los economistas "ajustadores", por el autista gobierno de la Rúa, por los cuadros políticos de los partidos tradicionales y por sus intelectuales "asesores". Esa invisibilidad de la crisis por parte de las elites políticas no es sino un síntoma de la misma. Se trata de la "despolitización de la política", de la que habló Bourdieu. Por si no bastara la escalada de conflictos sociales que asolaron los últimos años, podría haber servido de advertencia el record de abstención y voto nulo en las elecciones legislativas de octubre de 2001, totalizando la mitad del padrón electoral adulto.

Para comprobar que la crisis no fue un rayo en un cielo azul, y para acercarse interpretativamente a la misma, disponemos por lo menos de dos publicaciones, aparecidas inmediatamente antes del estallido. Se trata del número 5 del Observatorio Social de América Latina, publicado por CLACSO (septiembre 2001), que tiene como tema central el análisis de los conflictos sociales argentinos, y del libro organizado por Norma Giarracca, *La Protesta Social en la Argentina (transformaciones económicas y crisis social en el interior del país)*, publicado por Alianza (octubre 2001).

Estas publicaciones resultan de alguna forma complementarias. El boletín de CLACSO incluye cinco artículos que contextualizan la crisis económica y política, y que analizan el fenómeno de los cortes de ruta y de los movimientos de desocupados (en realidad, participantes de una cultura obrera suburbana con memoria sindical), en Buenos Aires y en Rosario. Contiene además documentos de los movimientos y una exhaustiva cronología. Por su parte, el libro organizado por Norma Giarracca, coordinadora del Grupo de Estudios Rurales de la Universidad de Buenos Aires, reúne catorce artículos dedicados a analizar la crisis y las respuestas populares a la misma en el medio agrario o en las pequeñas ciudades.

El punto de partida del libro de Norma Giarracca está en 1991, cuando se produce la "desregulación" de la economía agraria argentina, se consolida la apertura económica y se implanta la convertibilidad peso=dólar. Fueron disueltos los organismos reguladores y con ellos se extinguieron también redes y mecanismos formales e informales que constituían al mundo rural en dimensiones no apenas económicas, y en los que se fundamentaba, también, una establecida división regional del trabajo, que constituía, en última instancia, el perfil de la Nación. En esa época, los dispositivos discursivos

hegemónicos saludaron con entusiasmo esas medidas, que permitirían la incorporación de tecnologías y la modernización de la agricultura, aumentando su competitividad internacional. En Brasil, entonces, era dominante la visión que relegaba la Reforma Agraria a un prejuicio del pasado, en virtud de los éxitos atribuidos al modelo de modernización conservadora de la agricultura. Lo que no era explicitado ni en Argentina ni en Brasil era que la realización plena de ese modelo implicaría, como “efecto colateral”, la desaparición de los pequeños agricultores.

Un buen estudio de Miguel Teubal y Javier Rodríguez “Neoliberalismo y crisis agraria”, analiza críticamente este proceso de descampesinización de la tierra, mientras otros trabajos se orientan a relevar los perfiles regionales de las protestas y el surgimiento de nuevos actores, como el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha o los grupos indígenas en el norte y el sur del país.

Lo interesante de ambas publicaciones es que su aproximación analítica adopta perspectivas especialmente fértiles para la comprensión de la crisis del verano 2001/02. En efecto, el énfasis está puesto en las virtualidades de la acción colectiva como recuperación de dimensiones integrales de ciudadanía, que, al ejercerse, resquebrajan el “sentido común” individualista y pasivo inculcado por largos años de hegemonía del discurso neo-liberal y por el ejercicio de la “democracia de baja intensidad” (Boaventura de Sousa Santos). Ante la ausencia o la indiferencia de los “representantes” políticos, el ejercicio de la protesta social y las diferentes estrategias de desobediencia civil han permitido reencontrar valores de una ética de solidaridad y la posibilidad de creación de un nuevo espacio público, donde las identidades individuales se redefinen en virtud de la existencia de proyectos colectivos.

La crisis social general se desató cuando, desconociendo la dimensión y la multiplicidad de las protestas sociales, y el significado profundo de la abstención electoral de octubre de 2001, “el Castillo decidió que los súbditos de la clase media eran sacrificables, y les impuso nuevos tributos” (para usar la metáfora ‘neofeudal’ de un texto clásico de Furio Colombo), e implantó la confiscación de los depósitos bancarios, a la que se siguió el estado de sitio y la insurgencia popular, la renuncia del gobierno, la convocatoria a elecciones presidenciales para marzo de 2002, la “desconvocatoria” una semana después y la designación de Duhalde por el Congreso.

Debe ser destacado también otro hito de esta historia. La constitución nacional prevé la presentación de iniciativas populares de proyectos de ley con un millón de firmas. En julio de 2001 se formó un Frente Nacional contra la Pobreza, que diseñó un programa de emergencia y se dedicó a la tarea ciclópea de reunir las firmas. Fue marcado un día nacional para proceder a las firmas, el 13 de diciembre: entonces, la participación de firmantes superó los tres millones. Era, de alguna forma, la gestación de un proyecto colectivo nacional-popular (para continuar con nuestra referencia gramsciana), el principio de la recuperación de una identidad de *pueblo*. Menos de una semana más tarde estallaba espontáneamente el levantamiento de Buenos Aires, derrumbando al super ministro Cavallo y arrastrando con él al gobierno de Fernando de la Rúa.

Vino luego el fenómeno de las Asambleas Populares, en las esquinas de barrios de todo el país, donde se procesa una crítica de la política representativa, y un ejercicio de democracia participativa, que por ahora solamente se afirma en la negación del orden constituido (la consigna "que se vayan todos") y que, al mismo tiempo, se presenta como una absoluta novedad: no se invoca a ningún fantasma del pasado, se protesta contra el poder pero no se pretende asaltarlo. Es una profunda y pacífica revolución de la cultura política, que está constituyendo un nuevo sentido común. Parece como si la tarea prioritaria, a la que se dedican las mejores energías, fuera la de la reconstrucción de las capacidades personales de los participantes, dañadas por años de capitalismo salvaje, para permitirles asumirse como sujetos políticos integrales, capaces de acciones colectivas propositivas. Es una empresa durkheimniana, de recuperación de la solidaridad orgánica luego de la patología de anomia sistemática del fundamentalismo de mercado.

Si esto es así, quizás sean prematuros o contraproducentes los intentos de avanzar en consolidaciones programáticas u organizativas, que prodrían provocar una feudalización del espacio público tan trabajosamente reconstruido. En cambio, podría ser un buen camino el de avanzar institucionalmente, en áreas como una reforma constitucional refundadora del espacio y las prácticas políticas, en cuestiones relativas al ejercicio del poder en el ámbito local o en medidas fiscalizadoras de interés público, como comités de monitoreo y vigilancia de operaciones financieras, de temas ambientales, de ética político-administrativa, como mecanismos de recreación de la ciudadanía.

OBSERVATORIO SOCIAL DE AMÉRICA LATINA,
5, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
Buenos Aires, Septiembre 2001.

Norma Giarracca (org.), La Protesta Social en la
Argentina (Transformaciones económicas y crisis
social en el interior del país), Alianza, Buenos Aires,
2001, 118.

Héctor A. Alimonda é
professor da UFRRJ/CPDA.

Estudos Sociedade e Agricultura, 17 outubro 2001: 145-149.